



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

D. E. I. y P. de Barranquilla, veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Radicado	08-001-33-33-006- 2020-00232-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandantes	Astrid Cecilia Meza Cepeda
Demandados	Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Distrito de Barranquilla, Secretaria de Educación Distrital.
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I.CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que antecede y revisados los requisitos establecidos en los artículos 159 a 166 de la Ley 1437 de 2011 y el decreto 806 de 2020 para la admisión, se advierten falencias en la demanda, lo que hace menester inadmitir la presente acción de conformidad en lo siguiente:

1. Sobre el incumplimiento al artículo 6° del Decreto 806 de 2020.

Al revisar el libelo introductorio, se evidencia omisión a exigencia contenida en Decreto Legislativo No. 806, dictado por el Presidente de la República el 04 de junio de 2020, y *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, cuya declaratoria continúa vigente en el territorio colombiano.

Dicha omisión se concreta en no haber enviado la parte actora, simultáneamente a la presentación de la demanda, copia de ésta a la parte accionada a través de medio electrónico, como lo exige el artículo 6° ibídem. Ahora bien, al tener el Decreto 806 de 2020, fuerza vinculante sobre la aptitud de los requisitos para admitir la demanda sub examine, entonces el haberse incumplido con uno de los mandatos impuestos por la mencionada norma, es causa para inadmitir la acción, sobre todo porque esa inadmisión es la consecuencia expresa consagrada en el Decreto, lo cual, se justifica en las líneas que pasan a exponerse:

A)-. Sobre la vigencia y aplicabilidad del Decreto 806 de 2020.

Indica el artículo 215 de la Constitución Política, que dentro del Estado de Emergencia, *“podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”*. Así, al ser el Decreto 806 uno de los regulados por el artículo 215 superior, tiene el mismo poder vinculante para los sujetos procesales, que ostenta la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ello se ratifica al evidenciarse que en uno de sus considerandos el Decreto precisa que *“se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”*.

Es en este contexto donde el tenor literal del artículo 16 del Decreto 806, que trata sobre su "Vigencia y derogatoria", indica que *"El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición"*.

Así, como el Decreto Legislativo se expidió el 04 de junio de 2020, y es entre otras cosas complementario de las demás normas procesales vigentes, entonces desde dicha fecha tiene vigencia y aplicabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal.

Esa aplicabilidad cobra efectividad, entre otras especialidades, sobre los trámites promovidos en esta jurisdicción, en virtud de los efectos propios del artículo 1° del Decreto, en cuya redacción se indica que éste "tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la (...) jurisdicción de lo contencioso administrativo (...)".

En este panorama, al haberse presentado la demanda el **16 de diciembre de 2020**, como lo prueba la respectiva acta de reparto habitante en el expediente, entonces debió la parte actora cumplir el requisito de envió simultáneo a la parte accionada al igual que a la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado, del escrito de la demanda por medio electrónico, pero como no lo hizo deberá subsanar ese vicio.

2. Sobre la falta de formalidades del poder

Se advierte por parte del despacho, que el poder aportado por el togado con la demanda no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, toda vez que en el mismo no se consignó la dirección electrónica del apoderado tal como se establece a continuación:

ARTÍCULO 5. *Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.*

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.

3. Incumplimiento de requisito de procedibilidad

En relación Artículo 34 de la Ley 2080 de 2021 que modifica el numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece lo siguiente:

Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables; el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que

se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. (...)

De conformidad a lo anterior después de realizarse el análisis correspondiente, tenemos que el accionante no acredita haber agotado el requisito de procedibilidad consistente en el trámite de conciliación prejudicial, el cual es de carácter obligatorio previo a la presentación de la demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto se ha pronunciado el Consejo de Estado mediante providencia de fecha 25 de abril de 2012 con magistrado ponente Olga Melida valle al señalar:

*Al introducir requisitos de procedibilidad, se persiguen fines constitucionales legítimos, tales como evitar la alta litigiosidad superflua, limitar el conocimiento de ciertas acciones, por su importancia institucional, a ciertas autoridades judiciales, velar por la seriedad de las demandas ciudadanas para proteger el correcto funcionamiento del aparato judicial, favorecer la solución alternativa de conflictos, como en el caso de la conciliación prejudicial entre otros.*¹

Lo anterior, toda vez que a pesar de señalar haberse agotado el requisito de procedibilidad, en audiencia de fecha 23 de septiembre de 2020, la cual fue improbadada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, no se aporta con la demanda constancia o acta correspondiente de Conciliación.

RESUELVE:

1. **INADMITIR** la presente demanda presentada por la señora **ASTRID CECILIA MEZA CEPEDA**, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho.
2. **OTORGAR** en consecuencia un término de diez (10) días a la parte actora, contados a partir de la notificación de la presente providencia, para subsanar las falencias advertidas en el presente proveído, so pena de rechazo, de conformidad a lo establecido en el artículo 170 de la ley 1437 de 2011.
3. **SE RECONOCE** personería jurídica a la Doctora **DIANA PATRICIA ZUÑIGA BARBOSA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 45.542.824 y tarjeta Profesional N° 165.841 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ALVAREZ QUIROZ
JUEZA

L.P.V

¹ Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejera Ponente: Olga Melida Valle de la Hoz. Providencia del 25 de abril de 2012.

Radicación: Expediente No. 08-001-33-33-010-2020-00232-00
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Astrid Cecilia Meza Cepeda
Accionados: Ministerio de Educación Nacional, Fomag, Distrito de Barranquilla y otros

Firmado Por:

LILIA YANETH ALVAREZ QUIROZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BARRANQUILLA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9bec5533f290916f1aa6fa8f6b2b164cc4a64e901c94b41ddb718fd402702a52**
Documento generado en 25/02/2021 02:10:17 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>